

ÁREA DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN CANTABRIA

C/ Calvo Sotelo, 25

39071 Santander

ASUNTO: Trámite por el que se somete a información pública de solicitud de autorización administrativa previa y declaración de impacto ambiental del anteproyecto del parque eólico Bustatur de 51 MW y su infraestructura de evacuación, situado en los términos municipales de Las Rozas de Valdearroyo, en Cantabria, y Alfoz de Santa Gadea y Valle de Valdebezana, en Burgos, promovido por la empresa GreenCapital Power, S.L.

Expediente número: IGE 6-2020.

D. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, con DNI XXXXXXXXXXXX, en nombre y representación de la asociación PLATAFORMA PARA LA DEFENSA DE LA CORDILLERA CANTÁBRICA, con CIF G74097213, inscrita en el Registro Nacional de Asociaciones con el número 172616 y con correo electrónico a efecto de notificaciones coordinacion@cordilleracantabrica.org,

EXPONE

Que en el Boletín Oficial del Estado número 101, de fecha 28 de abril de 2021 y en el Boletín Oficial de Cantabria número 83, de fecha 3 de mayo de 2021 aparece inserto el anuncio que refiere como sigue:

“DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN CANTABRIA

ÁREA DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

CVE-2021-3747. Información pública de solicitud de autorización administrativa previa y declaración de impacto ambiental del anteproyecto del parque eólico Bustatur de 51 MW y su infraestructura de evacuación, situado en los términos municipales de Las Rozas de Valdearroyo, en Cantabria, y Alfoz de Santa Gadea y Valle de Valdebezana, en Burgos, promovido por la empresa GreenCapital Power, S.L.”

Que, paralelamente, desde el Área de Industria y Energía de la Delegación del Gobierno en Cantabria se ha cursado notificación a la Plataforma para la Defensa de la Cordillera Cantábrica, representada por quien suscribe, de los extremos anteriores, dando cuenta de que los expedientes de referencia (contenidos en el IGE 6-2020) serán resueltos en su día por la Dirección General de Biodiversidad y Calidad Ambiental y la Dirección General de Política Energética y Minas del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, por ser materias de competencia estatal.

Que, así mismo, se hace saber que de conformidad con lo recogido en el artículo 37 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental, adjunto se remite dirección para descarga del documento ambiental a los efectos de formular las alegaciones que se estimen pertinentes, lo que motiva la presentación de este pliego que, si bien se realiza fuera del plazo establecido, no se cuestiona la disposición de ese organismo a considerarlo en todos sus términos.

Que, al amparo de lo establecido, entre otras, en las siguientes normas:

- Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres,
- Convenio Europeo del Paisaje, establecido en Florencia el 20 de octubre de 2000,
- Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica,
- Directiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de junio de 2001, relativa a la evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente,
- Ley 2/2001, de Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria,
- Ley 1/2005, de 9 de marzo, por la que se regula el régimen del comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero,
- Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente (incorpora las Directivas 2003/4/CE y 2003/35/CE),
- Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. Modificada por Ley 7/2018, de 20 de julio, Ley 33/2015, de 21 de septiembre y Real Decreto 1015/2013, de 20 de diciembre, entre otras disposiciones,
- Ley 45/2007 del 13 de diciembre para el Desarrollo Sostenible del Medio rural,
- Real Decreto 1432/2008, de 29 de agosto, por el que se establecen medidas para la protección de la avifauna contra la colisión y la electrocución en líneas eléctricas de alta tensión,
- Directiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de noviembre de 2009, relativa a la conservación de las aves silvestres,
- Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero, para el desarrollo del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y del Catálogo Español de Especies Amenazadas. Modificado por Orden TEC/596/2019, de 8 de abril, Orden AAA/1351/2016, de 29 de julio, Orden AAA/1771/2015, de 31 de agosto y Orden AAA/75/2012, de 12 de enero,
- Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno,
- Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico,
- Directiva 2014/52/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de abril de 2014, por la que se modifica la Directiva 2011/92/UE, relativa a la

evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente,

- Ley 21/2015, de 20 de julio, por la que se modifica la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes,
- Ley 9/2018, de 5 de diciembre, por la que se modifica la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental,

Que en virtud de tal anuncio y a los efectos de lo previsto en el artículo 53 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, el artículo 36 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental y el artículo 124 y siguientes del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, se participa por medio del presente escrito en el trámite de información pública manifestando la disconformidad de la asociación PLATAFORMA PARA LA DEFENSA DE LA CORDILLERA CANTÁBRICA, con el Anteproyecto de Parque Eólico Bustatur de 51 MW y su infraestructura de evacuación y el estudio de impacto ambiental (Expediente IGE 6-2020), por lo que interpone el presente **ESCRITO DE ALEGACIONES**:

Primera.- SOBRE LA FALTA DE TRANSPARENCIA Y PARTICIPACIÓN PÚBLICA.

De la tramitación del expediente se concluye que no se cumplen las obligatorias exigencias del Convenio de Aarhus y la Ley 27/2006, sobre la participación pública en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en asuntos ambientales, desarrollado, entre otras, por la Directiva 2003/35/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, 26 de mayo de 2003, por la que se establecen medidas para la participación pública en la elaboración de determinados planes y programas relacionados con el medio ambiente y por la que se modifican, en lo que se refiere a la participación del público y el acceso a la justicia, las Directivas 85/337/CE y 96/61/CE, vinculante por comunitario, ratificado por España el 29 de diciembre de 2004 y traspuesto a nuestro ordenamiento por la citada Ley 27/2006, de 18 de julio.

Segunda.- SOBRE LAS CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO.

2.1.- Existe una indefinición en la magnitud de los aerogeneradores que se pretenden instalar.

La descripción y características del proyecto adolece de una definición imprescindible para la evaluación ambiental del proyecto: la confirmación del modelo y dimensiones de los aerogeneradores a instalar. Tal y como se solicita en el Documento de Alcance, epígrafe 4, página 16, a lo que la empresa en su EIA alega que *“el modelo y potencia unitaria de la máquina proyectada podrá ser modificado en función de la evolución tecnológica, debiendo considerarse, por tanto, como una solución básica”*. No expone el fabricante ni el modelo de aerogenerador que se pretende utilizar, lo que **imposibilita el EIA acorde a ello**.

El EIA debe realizarse sobre un proyecto definido técnicamente. No es posible ni admisible evaluar un proyecto que puede cambiar hasta ese punto. Desde un punto de vista acústico, la diferencia del ruido y vibraciones generadas por

modelos de diferentes dimensiones son significativas, no es lo mismo un generador de menores dimensiones que otro de mayores (la aerodinámica es así de caprichosa). A la vista de lo expuesto, este estudio acústico carecería de validez legal siendo imprescindible un nuevo estudio que considere los aerogeneradores que finalmente se instalarán con sus respectivas especificaciones técnicas. Y el mismo razonamiento se aplicaría al resto de estudios, empezando por el de afección al paisaje.

El órgano ambiental no puede por tanto aceptar una ambigüedad como la expuesta en el anteproyecto respecto a los aerogeneradores que se van a instalar sin acometer un **nuevo proceso de información pública** conforme prescribe el Art 38.2 de la Ley 21/2013.

2.2.- Falta de justificación de las necesidades reales.

El EIA no justifica la necesidad del proyecto en función de la demanda energética de la zona de actuación. Ni anteproyecto, ni EIA presentados analizan ni justifican en ningún capítulo de los mismos la necesidad energética de la zona de actuación ni por supuesto definen mínimamente esta, incumpliendo de este modo lo indicado en la resolución SGEA/ACL/fjs/20180074:

“Se justificará adecuadamente la necesidad de ejecución del proyecto...en función de la demanda energética en la zona de actuación y la planificación energética a nivel nacional y autonómica. Se definirá la integración del proyecto y sus alternativas respecto a las previsiones y directrices del Plan de Sostenibilidad Energética de Cantabria 2014-2020”.

El Documento Ambiental explicita que se debe justificar la necesidad del proyecto y la compatibilidad con la planificación energética. Consiguientemente, sin justificación del proyecto, este pierde toda razón de ser y no cabría, jurídicamente hablando, continuar con la tramitación del expediente.

2.3.- Sobre las alternativas planteadas.

Tal y como se exige en el Anexo VI, 2a de la ley 21/ 2013, las alternativas propuestas deben ser técnica y ambientalmente viables y se deben tener en cuenta no sólo aspectos económicos sino lo de carácter social y ambiental.

Tanto la propuesta como sus alternativas perjudican las estrategias de desarrollo local o rural del territorio y deterioran la aptitud del medio rural para el restablecimiento de la población. Son incompatibles con otras formas de desarrollo susceptibles de generar más empleo y de fijar más población en el medio rural. Los municipios afectados tienen como actividades económicas principales la ganadería extensiva y el turismo rural; sectores ambos que peligran con la implantación de este polígono eólico y su infraestructura de evacuación.

Se presentan en el documento alternativas voluntaristas, vacías de contenido y significación, elaboradas para cumplir las exigencias legales, pero no parecen en absoluto elaboradas como alternativa de estudio seria. En el PSEC la Dirección General de Medio Ambiente indica que

“Las alternativas estarán en un cambio de ubicación del proyecto de parque eólico en el mismo ámbito territorial del proyecto en solicitud, y siempre que impliquen una disminución de su impacto ambiental o coste ambiental de su

implantación y garanticen la ausencia de sinergias e impactos acumulativos con otros proyectos colindantes. Dichas alternativas deberán suponer un menor impacto sobre el paisaje, los Espacios Naturales Protegidos, los hábitats, la fauna y flora, etc. De manera específica, sólo podrá considerarse como alternativa viable aquellos proyectos que generen un impacto potencial medio-bajo sobre la avifauna y los quirópteros, así como un menor impacto sobre el paisaje y el conjunto de elementos ambientales asociados a la conectividad territorial y funcionalidad ecológica del área de afección del proyecto.”

Además de incumplir la Normativa del PSEC, no se han tenido en cuenta las determinaciones del documento de alcance para la elaboración de alternativas de la línea de evacuación (página 102 del EIA. 2.4.8.3 Línea de evacuación), aspecto que hace inviable el proyecto.

2.4.- Incumplimiento de directrices técnicas y ambientales

Como se desarrollará en diferentes puntos de estas alegaciones, se incumplen las Directrices Técnicas y Ambientales para la regulación de los Parques Eólicos incluidas en el PSEC 2014-2020 y la Ley 7/2013, 25 de noviembre, por la que se regula el aprovechamiento eólico en Cantabria. Se trata de normativa autonómica que vincula y obliga a todas las iniciativas eólicas.

En el Plan de Sostenibilidad Energética de Cantabria se indica asimismo que se ha de “seleccionar las zonas en las cuales se puedan conciliar mejor el aprovechamiento de la capacidad de los recursos energéticos disponibles y la protección del entorno”. Asimismo, queda expresada la necesidad de tener presente la incidencia sobre la Red de Espacios Naturales Protegidos de Cantabria y sobre el patrimonio histórico de Cantabria, no cumpliéndose con las condiciones de protección del entorno.

Tercera.- SOBRE LA AUSENCIA DE CUMPLIMIENTOS NORMATIVOS Y LEGALES EN EL EXPEDIENTE.

El parque eólico Bustasur es un sub-parque que se engloba dentro de un complejo eólico de mayor tamaño y que incluye otros parques eólicos previstos. En esta circunstancia, el estudio de impacto ambiental debería realizarse sobre el parque eólico completo, que incluye todos los sub-parques citados en la resolución y otros que Green Capital Power está tramitando por la zona, como Amaranta y Quebraduras. Además, el nuevo proyecto omite cualquier información relativa al PE El Acebo (81 MW) situado a tan sólo a 15,9 km. Sobre este parque eólico no se pronuncia la empresa, por lo que se asume que no ha sido desestimado como el PE La Rasa y que, por tanto, la intención es de unir el PE El Acebo con otros de nueva creación en las inmediaciones de éste.

Además, entendemos que debería aplicarse la disposición adicional undécima de la Ley 21/2013 de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental, que determina sobre la acumulación de procedimientos de evaluación de impacto ambiental que

“Con carácter general cada procedimiento de evaluación de impacto ambiental deberá referirse a un único proyecto. No obstante, el órgano ambiental podrá acordar la acumulación de procedimientos cuando concurran las circunstancias

señaladas en el artículo 73 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.”

Cuarta.- SOBRE EL INCUMPLIMIENTO DE DIRECTRICES ESTABLECIDAS EN EL PLAN DE SOSTENIBILIDAD ENERGÉTICA DE CANTABRIA 2014-2020.

Llamamos la atención sobre el incumplimiento de las Directrices Técnicas y Ambientales para la regulación de los Parques Eólicos incluidas en el PSEC 2014-2020 y la Ley 7/2013, 25 de noviembre, por la que se regula el aprovechamiento eólico, ambos de Cantabria. Se trata de normativa autonómica que vincula y obliga a todas las iniciativas eólicas, incluidas aquellas que, por sus peculiaridades muchas veces forzadas e interesadas, se tramitan por la Administración a la que aquí nos dirigimos. Esto queda igualmente reflejado en la resolución SGEA/ACL/fjs/20180074 de la Dirección General de Biodiversidad y Calidad ambiental en relación al presente expediente donde se manifiesta que se han de seguir las directrices técnicas y ambientales para la regulación del desarrollo de los parques eólicos del Plan que el Gobierno de Cantabria tiene aprobado (Plan de Sostenibilidad Energética de Cantabria 2014-2020 PSEC).

La actividad de generación de energía eléctrica destinada al suministro, viene regulada por la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, pues bien, a los efectos de coordinación con planes urbanísticos, en el artículo 5.1 del citado texto legal, se establece que

“La planificación de las instalaciones de transporte y distribución de energía eléctrica, que se ubiquen o discurran en cualquier clase y categoría de suelo, deberá tenerse en cuenta en el correspondiente instrumento de ordenación del territorio y urbanístico, el cual deberá precisar las posibles instalaciones y calificar adecuadamente los terrenos, estableciendo, en ambos casos, las reservas de suelo necesarias para la ubicación de las nuevas instalaciones y la protección de las existentes”.

Este incumplimiento de ausencia de instrumento de ordenación del territorio queda indicado en la alegación sexta. No obstante, sobre la naturaleza de los terrenos a la que alude el texto anterior cabe señalar que el suelo en que se pretende implantar la infraestructura tendría la consideración de Suelo no Urbanizable o Rústico y la autorización solicitada incumpliría la norma urbanística, pues en tales suelos están prohibido que, sin razones debidamente argumentadas que justifiquen la excepción, construcciones, actividades y usos que impliquen la transformación de su naturaleza. De acuerdo con las prescripciones de la Ley 2/2001, de Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria, la actividad de generación industrial eólica no tiene cabida en un suelo rústico de tales características, por lo que con carácter previo habría de procederse a la tramitación de la excepción en los términos que contempla el artículo 116 y sus concordantes.

Ello es así, toda vez que el artículo 112 de la Ley del Suelo exige que, en su caso, la autorización deba “tener en cuenta el carácter tasado de la excepción” que, de así pretenderse, permitiera actuar tan agresivamente en tal tipo de suelo, y ya que un parque eólico no constituye una excepción o singularidad que por sí justifique tal actuación.

El proyecto precisaría, en principio, la autorización de uso excepcional al que antes nos hemos referido, que, en su caso, debería otorgar la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo (CROTU), siendo que, en este caso y a tal fin, la declaración de utilidad pública no está justificada en la documentación presentada, que no justifica beneficios para el territorio, inversiones reales, puestos de trabajo también reales, fijos y permanentes, mejora de infraestructuras, medidas correctoras, indemnizaciones compensatorias, etc. que paliaran, al menos, el dañino impacto de la infraestructura en el territorio, no analizando siquiera la afección socio-económica en actividades asentadas, turística, cultural, agrícola, ganadera, deportiva, hostelería,... que supondría para dicho territorio.

En todo caso, la declaración de utilidad pública exige el trámite de un expediente mucho más garantista y complejo del que se pretende tramitar, mientras el interés social debe ser, por supuesto, analizado como algo radicalmente ajeno al interés económico de la empresa promotora, siendo evidente, por otra parte, que “utilidad pública” e “interés social” de un parque industrial eólico no pueden analizarse en abstracto, de modo ajeno a la realidad práctica.

A todo lo anterior cabe añadir otro aspecto, cual es la generación de una evidente pérdida de pastos, dado que la mayor parte del monte donde no existe repoblación forestal en el que se pretende ubicar el proyecto, está destinada al aprovechamiento por ganadería extensiva y su uso está recogido en la Ordenanza reguladora de los Pastos para el Monte de Utilidad Pública número 244 BIS, (BOC nº 69, de 7 de abril de 2017). La instalación de los aerogeneradores supondrá una ocupación de suelo en pleno dominio, servidumbres de paso y de vuelo inasumibles en lo que concierne a la superficie de protección eólica afectada por la limitación de dominio, y la ocupación temporal de terrenos en el plazo de construcción y puesta en marcha del parque eólico. Dicha ocupación junto con el tránsito de maquinaria y personal durante la fase de construcción y, en menor medida, en la de explotación, afectará de manera importante al uso ganadero de ese monte, impacto que no se ha evaluado en el EsIA.

El Plan de Sostenibilidad Energética de Cantabria 2014-2020 indica asimismo que se han de *“seleccionar las zonas en las cuales se puedan conciliar mejor el aprovechamiento de la capacidad de los recursos energéticos disponibles y la protección del entorno”*. Asimismo, queda expresada la necesidad de tener presente la incidencia sobre la Red de Espacios Naturales Protegidos de Cantabria y sobre el patrimonio cultural y etnográfico de Cantabria. Tal como se indica en las presentes alegaciones queda de manifiesto que este proyecto no cumple con las condiciones de protección del entorno, dadas sus especiales características.

Quinta.- SOBRE EL IMPACTO SOCIOECONÓMICO DEL PROYECTO.

El impacto en el empleo para los habitantes del municipio y su entorno es claramente negativo, pues la mayoría de las personas en edad de trabajar lo hacen en el sector primario (ganadería extensiva), y el sector servicios (hostelería, turismo y otros). La afección al patrimonio cultural y natural devalúa el atractivo turístico del entorno, lo cual se traducirá en la destrucción de empleo ligado a este sector.

Reiteramos al respecto la exigencia de trámite de un expediente mucho más garantista y complejo del que el pretendido, en el que el interés social sea analizado como algo radicalmente ajeno al interés económico de la empresa promotora, siendo evidente, por otra parte, que “utilidad pública” e “interés social” de un parque industrial eólico no pueden analizarse en abstracto, de modo ajeno a la realidad práctica.

Asimismo, un análisis rápido permite comprobar que **la instalación de parques eólicos en comarcas próximas no ha fijado población en los municipios donde se ha implantado. Además**, la Orden HAC/02/2020, de 3 de febrero, aprueba la relación de municipios que tienen la condición de Zona Rural de Cantabria en Riesgo de Despoblamiento para el ejercicio 2020, considerando esta circunstancia el mayor desafío de la Comunidad Autónoma. A efecto de poder desarrollar estrategias de protección, establece como Municipios de Zonas Rurales de Cantabria en Riesgo de Despoblamiento para el Ejercicio 2020, entre otros, el de Las Rozas de Valdearroyo, afectado directamente, así como sus contiguos de Valderredible y Valdeolea.

La instalación de polígonos eólicos como el proyectado supone la desincentivación de la vida rural en pro de la industrialización, contraviniendo las líneas estratégicas determinadas en la legislación estatal para la dinamización del desarrollo sostenible en las áreas rurales.

En este sentido, la Ley 45/2007 del 13 de diciembre para el Desarrollo Sostenible del Medio rural, promueve como objetivos los siguientes en sus epígrafes c), e) y f):

c) Conservar y recuperar el patrimonio y los recursos naturales y culturales del medio rural a través de actuaciones públicas y privadas que permitan su utilización compatible con un desarrollo sostenible.

e) Lograr un alto nivel de calidad ambiental en el medio rural, previniendo el deterioro del patrimonio natural, del paisaje y de la biodiversidad, o facilitando su recuperación, mediante la ordenación integrada del uso del territorio para diferentes actividades, la mejora de la planificación y de la gestión de los recursos naturales y la reducción de la contaminación en las zonas rurales.

f) Facilitar el acceso a la vivienda en el medio rural, y favorecer una ordenación territorial y un urbanismo adaptados a sus condiciones específicas, que garantice las condiciones básicas de accesibilidad, que atiendan a la conservación y rehabilitación del patrimonio construido, persigan un desarrollo sostenible y respeten el medio ambiente.

Dicha ley establece en su artículo 10 la delimitación y calificación de las zonas rurales. Considera zonas rurales a revitalizar aquellas con escasa densidad de población, elevada significación de la actividad agraria, bajos niveles de renta y un importante aislamiento geográfico o dificultades de vertebración territorial. Un análisis de los municipios afectados por el proyecto, y particularmente el de Las Rozas de Valdearroyo, dentro de Cantabria, constataría su clasificación bajo este epígrafe. Por ello, consideramos que el proyecto del PE Bustatur no sólo no ha tenido en cuenta esta legislación, sino que contraviene todas las orientaciones recogidas en este apartado de las alegaciones al proyecto, ignorando los esfuerzos por proteger y dinamizar estas zonas siguiendo las normativas europeas, estatales y autonómicas que atañen a los municipios en riesgo de despoblación y en zonas rurales a revitalizar.

Sexta.- SOBRE LA AUSENCIA DE ORDENACIÓN TERRITORIAL EN CANTABRIA.

No existiendo ni el preceptivo PROT, ni ningún Plan Eólico cántabro en vigor, lo sometido a consultas **no se adecúa a ninguna planificación ni ordenación previa**. En primer lugar y como consecuencia de la falta de justificación de cualquier tipo de necesidad comunitaria o social de implantar tan agresivas y dañinas infraestructuras como los parques industriales eólicos, queremos dejar manifiesta nuestra permanente y frontal oposición a dicha implantación, en ningún caso, en suelos rústicos de tan alto valor paisajístico y ambiental como es el de los llamados “valles del sur” de nuestra Comunidad, afectados por estos Parques Eólicos.

A partir de ello y aun siendo innecesario cualquier argumento al respecto, además, la situación actual evidencia una manifiesta orfandad de marco regulatorio territorial, estando sin aprobar el preceptivo PROT (Plan Regional de Ordenación del Territorio), obligatorio en el *Corpus Jurídico* de la Administración Autonómica desde un año después de la entrada en vigor de la Ley de Cantabria 2/2001, de 25 de junio, de Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo, en los precisos términos que recoge la Disposición Final Primera, sobre los instrumentos de planificación territorial. Y a mayor abundamiento de lo anterior, a la carencia de este instrumento básico en la ordenación territorial de Cantabria se une la de un Plan Eólico específico que expresa y debidamente valore los impactos negativos sinérgicos o acumulados de todas estas infraestructuras en Cantabria y sus regiones limítrofes.

Con efecto meramente ilustrativo, queremos poner de manifiesto la constancia documentada de que al menos se han solicitado hasta la fecha un total de 50 Parques Eólicos, que en total acumulan ya una potencia generadora de 1.595,295 MW.

Cabe señalar adicionalmente que en el PSEC la Dirección General de Medio Ambiente indica que

“Para el desarrollo del sector eólico [...] es fundamental disponer de un Plan Regional de Ordenación del Territorio de referencia, sobre el cual planificar. También sería muy recomendable disponer de un Plan Específico de Protección de Paisajes, así como de una cartografía de vegetación y hábitats más actualizada, e incluso disponer de una cartografía de corredores ecológicos y conectividad territorial, aún no disponible.”

Por otra parte, conforme establece el artículo 5.1 de la Ley de Ordenación del Sistema Eléctrico (LOSEN), es necesaria la coordinación de los procedimientos de autorización y los derivados de la normativa de ordenación del territorio en estos términos textuales:

“La planificación de las instalaciones de producción, transporte y distribución de energía eléctrica deberá tenerse en cuenta en los diferentes instrumentos de ordenación urbanística y del territorio”.

En el caso que nos ocupa son de aplicación no sólo las normas del Estado, sino que ha de atenderse también a las de la Comunidad Autónoma de Cantabria sobre Ordenación del Territorio y en concreto al ya mencionado Plan Regional de Ordenación Territorial (PROT), en el que se establecen las Directrices

Parciales de Ordenación Territorial y que tienen como fin garantizar la ordenación y protección de los territorios de montaña. Hay que tener en cuenta además que la conservación del medio natural con el fin de favorecer el turismo de todo tipo es la fuente principal y, la mayoría de las veces, única para impulsar la economía de los territorios por los que pretende discurrir el parque eólico.

Concluimos este apartado sosteniendo razonadamente que no se puede autorizar ninguna nueva instalación sin aprobar antes el preceptivo PROT y un Plan Eólico específico que especifique y debidamente valore los daños impactos sinérgicos o acumulados de todas estas infraestructuras en Cantabria y regiones limítrofes.

No puede pasarse por alto que el parque eólico de Bustatur se inserta dentro de un parque eólico global, promovido por la empresa Green Capital Power, S.L. que afecta de forma general a todo el territorio y que incluye los parques eólicos denominados “Cotio” y “Olea”, el primero de los cuales prevé la instalación de 13 aerogeneradores con una potencia total de 26MW, y el parque “Olea” prevé la instalación de 16 aerogeneradores con una potencia total del parque de 32 MW. Significativamente, el Estudio de Impacto Ambiental se realiza exclusivamente sobre el Parque Eólico de Bustatur y línea de evacuación hasta la SET de Olea (30/220kV), obviando el resto de parques eólicos que comparten infraestructura con el mismo, incumpliendo el artículo 34 de la ley 21/2013 de Evaluación ambiental, relativo a actuaciones previas.

Séptima.- SOBRE EL INCUMPLIMIENTO DE LAS PREVISIONES DE LA LEY DE CANTABRIA 4/2014, DEL PAISAJE.

Queremos en todo momento reiterar el despropósito que supone proyectar y desarrollar parques eólicos de estas características en ausencia de desarrollo de todas estas directrices contempladas en la materia; vacío regulador en Cantabria al que se suma la carencia de instrumentos de desarrollo de la Ley del paisaje, cuyo artículo 4 insta expresamente a los poderes públicos a formular las estrategias y orientaciones que permitan “la adopción de medidas de protección, gestión y ordenación del paisaje”, así como a adoptar las medidas específicas necesarias para ello.

En efecto, la carencia de normativa reguladora en materia paisajística impide la sujeción del proyecto eólico “Bustaur” a instrumentos que ya deberían estar en vigor una vez fuera aprobada, hace ya siete años, la correspondiente Ley Básica del paisaje de Cantabria, como son

- 1) Los Planes Especiales del Paisaje (artículo 14 de la Ley de Cantabria 4/2014), que deben contener las normas de directa aplicación, directrices y determinaciones dirigidas a la protección, gestión y ordenación de una o varias unidades paisajísticas.
- 2) Las Directrices de Paisaje (artículo 15 de la Ley de Cantabria 4/2014), que definen las estrategias o pautas de actuación en materia de paisaje para todas las actuaciones, proyectos de desarrollo y ejecución que puedan tener incidencia paisajística; directrices cuyo proceso de aprobación está paralizado desde diciembre de 2018.

- 3) El Catálogo de Paisajes Relevantes (Disposición adicional primera de la Ley de Cantabria 4/2014), que también ha de ser tenido en cuenta en el diseño y redacción de los proyectos que puedan incidir en los mismos, cuya elaboración se encuentra igualmente paralizada desde diciembre de 2018.

Por otra parte, se incumplen la Ley 4/2014, de 22 de diciembre, del paisaje (BOC de 29 de diciembre de 2014) y el Convenio Europeo del Paisaje de Florencia, aprobado en el marco del Consejo de Europa, y firmado por España en Florencia el 20 de octubre de 2.000 y ratificado diez años después, que tiene por objetivo *“promover la protección, gestión y ordenación de los paisajes, así como organizar la cooperación europea en este campo”*, reconociendo a los paisajes como *“elemento fundamental del entorno humano, expresión de la diversidad de su patrimonio cultural y natural y como fundamento de su identidad”*, por lo que las partes firmantes se comprometen a *“definir y aplicar en materia de paisajes políticas destinadas a la protección, gestión y ordenación del paisaje e integrar el paisaje e integrar el paisaje en las políticas de ordenación territorial y urbanística y en sus políticas de materia cultural, medioambiental, agrícola, social y económica, así como en cualesquiera otras políticas que puedan tener un impacto directo o indirecto sobre el paisaje”*.

Por último, hemos de referirnos de nuevo a la Ley de Cantabria 4/2014, del paisaje, que en su Disposición Adicional Primera incluye la creación de un Catálogo de Paisajes Relevantes; dicho Catálogo se encuentra elaborado, existiendo un Anteproyecto de Decreto cuya tramitación parlamentaria aún no ha concluido y que afecta a zonas relacionadas con este proyecto de parque eólico. Esta ley **califica la zona de protección paisajística de alta fragilidad y de muy alta calidad y afecta a paisajes relevantes como el Embalse del Ebro** (figura como 066 en el Catálogo) **y el Monte Hijedo** (067 en el mismo documento), situados en el ámbito de afección del proyecto eólico, y cuyos valores paisajísticos, ambientales y culturales son extensamente recogidos, junto con las medidas sugeridas para su preservación, entre las páginas 261 y 270 del Catálogo citado.

Los parques industriales propuestos en esta zona -y concretamente el PE Bustasur, que nos ocupa- supondrían, sin duda, el fin de un área paisajísticamente bien conservada, con las implicaciones ecológicas y de pérdida de calidad de vida que, para sus habitantes, ello conlleva. Asimismo, en un escenario ambiental de cambio global la preservación de las especies y espacios se muestra como un hecho fundamental para crear “paisajes resilientes”; es decir: paisajes que por su diversidad puedan afrontar los cambios ambientales a futuro. En este escenario la conectividad entre espacios naturales es vital para el futuro de algunas especies y así se refleja en sus planes de conservación.

Octava.- SOBRE LA FALTA DE ESTUDIOS DE AFECCIONES POR RUIDO E IMPACTOS ACÚSTICOS.

No se ha realizado el estudio acústico ni el electromagnético, incumpliendo las directrices del Documento de Alcance, “3.1 (Pág. 10) Identificación, caracterización y cartografía de los núcleos habitados y viviendas aisladas en todo el ámbito del proyecto. Edificios u otras zonas habitadas particularmente

sensibles al ruido a radiaciones electromagnéticas.” Esta omisión resulta muy relevante, ya que el proyecto se encuentra a menos de un kilómetro del núcleo urbano de Bustasur. Igualmente omiten la petición del Documento Ambiental en el punto 4.1 Pág. 17 Población y salud humana:

“Se determinará el valor de los índices acústicos previsibles (sonidos e infrasonidos producidos por los aerogeneradores en fase de explotación) comparándolas con la situación preoperacional antes de la ejecución del proyecto, con el objeto de identificar las molestias que se producirán sobre la población...(…). Se cuantificará la población total sometida a niveles de ruido superiores a los umbrales legalmente exigibles...(…). Por otro lado, se incluirá una valoración de los efectos de los campos electromagnéticos generados por las líneas eléctricas de alta tensión en la fase de explotación, analizando la posibilidad de afección a la población....”

Además de lo mencionado también evidenciamos la omisión en el Estudio de Impacto Ambiental de una obligación legal: los límites de vibraciones que fija el RD1367/2007 en su artículo 26, que determina los valores límite de vibración aplicables a los emisores acústicos. Como emisor nuevo (artículo 12.2j de la LR 37/2003), el PE está sometido a su cumplimiento.

Según lo expuesto en la presente alegación, se generan las suficientes dudas como para poner en valor el principio de precaución necesario para garantizar el bienestar de las personas residentes, así como las especies de fauna (aves, quirópteros...) ocupantes de zonas de especial protección.

Novena.- SOBRE LA AFECCIÓN A ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS Y ÁREAS PROTEGIDAS POR INSTRUMENTOS NACIONALES.

El parque eólico se encuentra en el entorno del ZEC ES1300013 “Rio y embalse del Ebro”, de la ZEPA “Embalse del Ebro” y del ZEC ES4120090 “Embalse del Ebro”. Es por ello que se incumple el requisito del documento de alcance “*Evitar parques en espacios naturales protegidos de cualquier tipo, incluida la Red Natura 2000, y en su inmediato entorno (al menos 5 kms)*”. Según el Plan de Sostenibilidad energética de Cantabria (PSEC) 2014-2020 son zonas de exclusión directa para parques eólicos terrestres todos los espacios de la Red Natura 2000, y la ejecución de este parque contempla el paso de la infraestructura de evacuación atravesando territorio con protección establecida por RN2000.

Además, el territorio en el que se asienta el P.E. de “Bustatur” y su infraestructura de evacuación forma parte de los espacios incluidos dentro de las Zonas de Protección de la Avifauna en Cantabria (Orden GAN 36/2011 de 5 de septiembre de 2011), que dispone la “protección de la avifauna contra la colisión y electrocución en las líneas aéreas eléctricas de alta tensión”. Esta protección se establece en zonas de flujo de corrientes de aire en las que las aves, planeadoras principalmente, poseen riesgo de impacto con dichas líneas eléctricas. La instalación eólica proyectada redundaría en este tipo de impacto y se sitúa en un pasillo para aves migrantes y planeadoras como así refleja el propio Estudio de Impacto Ambiental (EIA).

Ha de mencionarse igualmente el documento de alcance del MITECO, en cuanto indica que no deben ubicarse parques eólicos a menos de 5 kilómetros de un espacio protegido bajo cualesquiera de los instrumentos al efecto. Sin embargo, el parque se localiza a menos de 5 kilómetros del espacio natural del Monte Hijedo, declarado recientemente LIC (Lugar de Interés Comunitario) y perteneciente a la red NATURA 2000 de la Unión Europea, incumpléndose por tanto el requisito establecido.

Décima.- SOBRE LA VEGETACIÓN, HÁBITATS DE INTERÉS COMUNITARIO Y FLORA AMENAZADA AFECTADOS.

10.1. Alteración de Hábitats de Interés Comunitario (HIC).

La Directiva Hábitats define como tipos de hábitat naturales de interés comunitario a aquellas áreas naturales y seminaturales, terrestres o acuáticas, que, en el territorio europeo de los Estados miembros de la UE se encuentran amenazados de desaparición en su área de distribución natural, o bien presentan un área de distribución natural reducida a causa de su regresión o debido a que es intrínsecamente restringida, o bien constituyen ejemplos representativos de una o de varias de las regiones biogeográficas de la Unión Europea. Entre ellos, la Directiva considera tipos de hábitat naturales prioritarios a aquéllos que están amenazados de desaparición en el territorio de la Unión Europea y cuya conservación supone una responsabilidad especial para la UE.

Según se describe en el Estudio de Impacto Ambiental presentado en la documentación pública (pág. 140, Tabla 82), el área de instalación del PE Garma Blanca se encontraría en una zona en la que existen tres Hábitats de Interés Comunitario:

- 4030 (Brezales secos europeos)
- 4090 (Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga)
- 91E0* (Bosques aluviales de *Alnus glutinosa* y *Fraxinus excelsior*)

Respecto a este hábitat, se indica más adelante que “**se ha diagnosticado como vulnerable frente a las presiones de su entorno próximo**”. En el estudio de afecciones se informa de la **destrucción de 7,95 hectáreas de robledales**, sobre lo cual se concluye que “**no supone una gran pérdida para la vegetación de la comunidad autónoma siendo inferior al 0,05 % de la representación**”. Esta conclusión no es rigurosa dado que la situación de este hábitat es considerada “desfavorable” para la Red Natura 2000 en la región y es especialmente escaso en la mitad oriental de Cantabria, por lo que su destrucción, por mínima que sea, no debe ser considerada a la ligera. Además, en el apartado 7.3.1.5.3.- “Afección a hábitats de interés comunitario” no se incluye la destrucción de los rodales de roble ni se compara con su superficie en los municipios afectados, por lo que la evaluación no es completa.

En cuanto a los HIC 4030 y 4090, el estudio apunta lo siguiente:

“La conservación de los brezales es muy frágil incluso en áreas de escasa presencia antrópica. Representan fases temporales en la evolución del uso del suelo y del paisaje ligadas a una eliminación del bosque y a una escasa utilización agronómica acompañado de distrofia en el suelo y baja competencia

por otras plantas, por lo que cualquier modificación en las condiciones de drenaje, fertilidad o presión antrópica pueden inducir a su degradación y desaparición.”

Más adelante, sin embargo, el trabajo concluye que el impacto generado en los HIC 4030 y 4090 es compatible y residual dado que la superficie afectada es muy baja. Pese a esto último, la conclusión es contradictoria respecto a lo afirmado en la cita previa, esto es, que cualquier alteración de origen antrópico, por pequeña que sea, puede inducir a la degradación y desaparición de estos dos HIC.

10.2.- Afección a la superficie forestal arbolada.

La zona de actuación se caracteriza por presentar amplias superficies forestales arboladas en un territorio en el que alternan con amplios espacios abiertos y que constituyen un mosaico vegetal que concilia diferentes hábitats y propicia una amplísima biodiversidad, propia del ámbito de transición que constituye este territorio -no en vano se trata de una de las zonas de Cantabria donde se concentra mayor número de especies de fauna y flora- y cuya amplia cobertura boscosa ejerce una función primordial en la contención de los procesos erosivos.

Esta superficie forestal constituye un hábitat de alto valor ecológico que requiere de medidas de protección como se indica en el Plan Forestal de Cantabria - plan estratégico regional sobre el medio natural:

“La protección de los sistemas forestales frente a la amenaza que suponen los incendios; así como el mantenimiento y mejora de su salud y vitalidad, la restauración del medio natural y la lucha contra la erosión, constituyen componentes esenciales de la sostenibilidad forestal que deberán estar controlados de forma que los daños ocasionados presenten niveles asumibles y los sistemas forestales dispongan de mecanismos de protección y autodefensa frente a los principales procesos y riesgos que les amenazan”.

Del análisis realizado por el promotor se concluye que se perderá un total de 14,64 ha de superficie forestal arbolada. Si tenemos en cuenta el límite territorial de afecciones del proyecto, formado por las subcuencas hidrográficas y los municipios, representa una superficie de 7.517 ha, de las cuales un 18% corresponden a la superficie forestal. Es decir, casi un 1% de la superficie forestal de la zona será eliminada, cifra muy alejada del 0,0081% ponderada respecto a la superficie forestal autonómica y que en las conclusiones se considera de “escasa superficie”.

Así mismo se considera compatible por la aplicación de las medidas preventivas y correctoras y la aplicación del plan de restauración y recuperación ambiental, que finalmente no se presenta en este estudio, ciñéndose a concluir que debido a que actualmente las actuaciones se encuentran en una fase preliminar, no se estima viable la redacción de un riguroso proyecto de restauración. Así, se considera que el documento presentado tiene carácter general, teniendo en consideración que éste se desarrollará detalladamente con la redacción del proyecto final una vez finalizadas las obras del parque eólico, de la subestación y de su línea de evacuación.

Decimoprimer.- SOBRE LOS IMPACTOS DIRECTOS Y AFECCIONES A LA FAUNA.

Dada la amplia diversidad de especies tanto de aves como de quirópteros, estas se verán gravemente afectadas por los daños que pueden sufrir tanto debidos a colisiones con las aspas de los aerogeneradores o con las líneas eléctricas de evacuación, como por molestias y desplazamientos como consecuencia del ruido, el electromagnetismo y las vibraciones que provocan los aerogeneradores, así como el trasiego de personas o vehículos durante las obras, debido también al efecto barrera a las áreas de alimentación o descanso, y a la destrucción de sus hábitats por la propia ocupación del terreno.

11.1.- Sobre los impactos previsibles en las poblaciones de aves rapaces.

La zona afectada por el PE Bustatur es área de campeo constante del buitre leonado y de presencia frecuente del alimoche, estas especies están protegidas, buitre leonado (especie incluida en el anexo I de la Directiva 2009/147/CE y en el Listado de Especies en Régimen de Protección Especial -LESPRE-), y el alimoche (catalogada como especie amenazada tanto a nivel del Estado -RD 139/2011- como de Cantabria -Decreto 120/2008-, incluida en el anexo I de la Directiva 2009/147/CE).

No ajeno a esta situación, el estudio revela que el buitre leonado, el milano real y el alimoche se muestran como las especies más sensibles, destacando la atención que merecerían las dos últimas por la vulnerabilidad de sus poblaciones. Y seguidamente refiere la alta sensibilidad del aguilucho pálido en la zona, donde constata su nidificación y la óptima calidad y tranquilidad del hábitat que ocupa y la buena disponibilidad de presas, afirmando -lo que resulta sobrada y documentadamente reconocido- que se trata de *“una especie protegida y amenazada, muy dependiente de la conservación de sus hábitats de reproducción”*.

Sobre esta especie, con solamente 22-26 parejas censadas en Cantabria, en el EiA se considera *“Alto”* el riesgo para varios de los aerogeneradores proyectados, reconociéndose un impacto severo. Sin embargo, se concluye resolviendo proceder a evaluar el riesgo que supone la pérdida de la calidad del hábitat para las especies del género *Circus* (aguiluchos), sin aportar más estudio al efecto.

Concluyendo el EIA el alto riesgo de colisión de aves rapaces, y la afección directa que el parque eólico supondrá en una zona de cría para el aguilucho pálido, incluyendo áreas de alimentación anexas, resulta significativo que las medidas preventivas sólo se basen en la vigilancia de la incidencia para aplicar medidas correctoras una vez esté culminada la ejecución de todo el proyecto y el impacto resulte difícil (por no decir imposible) de corregir.

Asimismo, el parque afectaría en mayor o menor medida a otras especies incluidas en el Catálogo de especies amenazadas de Cantabria y también Castilla y León: los aguiluchos cenizo y lagunero, el águila culebrera, y rapaces forestales y semiforestales como el azor el gavián o el águila calzada.

11.2.- Impacto en otras aves.

La comunidad de aves tiene una diversidad alta (consignado el propio EIA al menos 48 especies nidificantes y 36 invernantes; todas ellas además de las especies objetivo) reconociendo en la comarca la existencia de un complejo mosaico de bosques, matorrales y pastizales que ofrece una gran variedad de hábitats distintos que acoge 37 taxones incluidos en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (RD 139/2011) y otras 6 especies en el Anexo I de la Directiva Aves, destacando por su estado desfavorable de conservación el alcaudón dorsirrojo.

A lo anterior cabe añadir que la referida afección a los brezales y formaciones boscosas de interés comunitario ocasionaría un impacto igualmente perjudicial para distintas especies de paseriformes que, si bien no están en situación de vulnerabilidad, contribuyen a la biodiversidad de una zona adyacente a la Red Natura 2000.

11.3.- Impacto en las especies de quirópteros y sus poblaciones.

Dado que todas las especies de quirópteros tienen la condición de especies protegidas (por el Catálogo Español de Especies Amenazadas, la Directiva de Hábitats y el Convenio de Bonn) no cabe adoptar medidas de compensación como contrapartida a la muerte de ejemplares a posteriori.

Dado que todas las especies de quirópteros tienen la condición de especies protegidas (por el Catálogo Español de Especies Amenazadas, la Directiva de Hábitats y el Convenio de Bonn) no cabe adoptar medidas de compensación como contrapartida a la muerte de ejemplares a posteriori. En este sentido, según Barbastella, la revista científica de investigación en Quirópteros (Nº6, 2013), en la actualidad no es posible eliminar la mortalidad en aquellos lugares en los que se han producido incidencias, por lo que se deberá considerar la retirada de aquellos aerogeneradores que supongan un grave peligro para poblaciones relevantes de quirópteros.

Según las directrices del informe de SEO/Birdlife (2011), de entre las principales preguntas a las que deberían dar respuesta los Estudios de Impacto Ambiental, en relación con las aves y los murciélagos, se incumple el hecho de que la instalación se sitúe fuera de una zona en las cercanías de HIC, ZEPA o LIC, así como que en la zona haya presencia de especies de aves o murciélagos catalogadas como Vulnerables, Sensibles a la Alteración de su Hábitat o en Peligro de Extinción en el Catálogo Estatal (o regional) de Especies Amenazadas, son motivos suficientes para declarar su sensibilidad potencial como “muy alta”.

Por cuanto respecta a los refugios, el estudio relata que ***“no se localizaron refugios para murciélagos ni existen cavidades catalogadas por su importancia para los quirópteros en el área de estudio ni en el buffer de 5 km de radio a partir de los aerogeneradores”***. Lejos de cuestionar estos extremos, cabe señalar la insuficiencia de información implícita en tal afirmación por cuanto se habla de refugios asociados a cavidades que, por tanto, nos remite a las especies cavernícolas, desconociéndose metodología o siquiera trabajo de campo conducente a la detección de refugios en las especies forestales, dependientes de las masas arbóreas bien desarrolladas existentes en la zona. Además, estas especies, consideradas “crípticas” resultan muchas veces

imposibles de identificar más allá de su rango genérico, toda vez que la metodología de detección por ultrasonidos, aún con ser la “oficialmente” establecida, resulta insuficiente para discriminar a estas especies (las del género *Myotis* o *Plecotus*, por ejemplo, muchas de hábitos marcadamente forestales).

Ante la amplia variedad de especies (el estudio reconoce 18 especies identificadas, además de las correspondientes a los géneros *Myotis* y *Plecotus*, no precisadas), toda medida preventiva se reduce a la puesta en marcha de un “plan de vigilancia ambiental específico y adecuado para detectar mortalidades, valorar su impacto (alto según reconoce el estudio) sobre la población y plantear medidas correctoras”, que solamente se aplicarían en función de los resultados de ese plan de seguimiento; esto es: cuando el impacto sea verificado y por tanto hasta entonces no se haya prevenido ni pueda restituirse, por la obvia casuística de la mortandad.

Decimosegunda.- SOBRE EL DESARROLLO SOSTENIBLE Y LOS RETOS GLOBALES.

El alejamiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible parece evidente. Desde un punto de vista local, el proyecto contradice estos objetivos, yendo en contra de los siguientes ODS debido a su acción concreta en el entorno: salud y bienestar, energía asequible y no contaminante, trabajo decente y crecimiento económico, reducción de las desigualdades y vida de ecosistemas terrestres.

Ha de destacarse además el ODS **Ciudades y comunidades sostenibles** para señalar que las actividades económicas que se desarrollan en la actualidad en el entorno pueden calificarse como sostenibles: por un lado, la actividad ganadera en extensivo y con una clara custodia del territorio asociada a su práctica, y por otro lado turismo rural -turismo del conocimiento- de alto valor ecológico y concienciado con la protección del medio ambiente y el patrimonio natural y cultural.

Mención aparte ha de hacerse sobre la huella de carbono y el impacto en el cambio climático, algo que no puede dejar de observarse ante cualquier proyecto de esta naturaleza. Cantabria se enfrenta a un cambio de ciclo histórico marcado por la necesidad a nivel global de hacer frente de manera urgente y resolutive al desafío que plantea abordar un suministro de calidad, seguro y suficiente de energía sin generar desequilibrios en el ecosistema global, especialmente los asociados al gran reto que plantea el cambio climático. Esto implica la necesidad de realizar un cálculo real de la huella de carbono del Proyecto Eólico “Bustatur”, sobre la base de un riguroso estudio, que debería formar parte de su estudio de impacto ambiental, so pena de convertir a éste en un documento de insuficiente rigor.

Decimotercera.- CONSIDERACIONES ALTERNATIVAS FINALES.

13.1.- Queremos poner de manifiesto la necesidad de apostar por modelos de producción de energía renovable descentralizados.

Los grandes proyectos de producción de energía renovable como el PE Garma Blanca, inevitablemente suponen importantes alteraciones e impactos ambientales, sociales y económicos para los territorios donde se implementan.

Desde una visión que tenga en cuenta los intereses de la población local y la preservación del medio ambiente, existen propuestas de descentralización y diversificación de los modelos de producción de energía renovable. En este sentido, Vezzoli et al. (2018), sostienen que los sistemas centralizados formados por instalaciones a gran escala como es el PE Garma Blanca, contribuyen al agotamiento de los recursos. Además, como ya se ha indicado en el apartado anterior, estos modelos implican diversos impactos ambientales a través de los múltiples procesos a lo largo de todo su ciclo de vida, los cuales frecuentemente son obviados en los estudios de impacto ambiental (como es el caso del presentado para analizar la viabilidad del PE Garma Blanca).

Sin embargo, estudios como el de Vezzoli et al. (2018), apuntan a que, si analizamos en contraposición sistemas de producción de energías renovables a pequeña escala, existen muchas evidencias de su mayor sostenibilidad ambiental. Además, los sistemas centralizados son insostenibles también en términos socio-económicos, ya que limitan las posibilidades de acceso directo y democratizado a la producción y consumo de energía. En contraste, las pequeñas instalaciones de generación descentralizada para la producción y consumo de energía renovable son manejables por pequeñas entidades económicas, donde el usuario puede convertirse en prosumidor (productor + consumidor). En estos modelos, las unidades de generación pueden llegar a conectarse en una red de micro energía, potencialmente conectada con una red global (como es el caso ya existente de la cooperativa energética SOLABRIA en Cantabria). Desde esta perspectiva, los sistemas descentralizados contribuyen a una democratización del acceso a la energía, fomentando así la reducción de la desigualdad, la autosuficiencia comunitaria y el autogobierno. Vezzoli et al. (2018) destacan también que se ha estimado que los sistemas de producción de energía renovable descentralizada tendrían el potencial de permitir el acceso a la energía a más de mil millones de personas para el año 2025. Por tanto, el modelo que el proyecto PE Garma Blanca promueve, es un modelo que entra en diversos conflictos ambientales y sociales con las zonas donde se implementan, y frente a ello, existen alternativas de producción de energía renovable descentralizadas.

En este sentido, un informe de Greenpeace de 2017 (Energía colaborativa: el poder de la ciudadanía de crear, compartir y gestionar las renovables) muestra, por un lado, que hay potencial tecnológico para que la ciudadanía participe en la energía produciendo, consumiendo, intercambiando, almacenando o financiando las energías renovables, así como participando en sistemas de gestión de la demanda. Y, por otro lado, destaca que existe la predisposición de una de cada tres personas en el Estado Español de participar en la transición energética asumiendo, incluso, nuevos roles que se suman al de simple cliente de una empresa comercializadora. Algo que pone en duda que el ecosistema de la electricidad tenga necesariamente que seguir dominado por las grandes compañías eléctricas.

13.2.- Asimismo, queremos poner de manifiesto la necesidad de apostar por sistemas diversificados de producción de energía renovable.

Según un estudio realizado por Xianguo Li (2005), los predominantes sistemas de producción de energía renovable de una sola fuente en cada instalación

conducen inevitablemente a una carga excesiva y sus consecuentes impactos en el medio ambiente. En este sentido, cada sistema de producción de energía renovable, tiene sus propios impactos adversos en el medio ambiente. Para aspirar a un desarrollo verdaderamente sostenible mediante energías renovables, además de la descentralización de los sistemas de producción energética, es necesaria la diversificación y localización de las fuentes de producción energética, desarrollando sistemas adaptados a las condiciones y características concretas de cada contexto específico, aspirando a no sobrepasar la capacidad de carga ambiental de cada zona, entendiendo esta en toda su diversidad y complejidad. La diversificación y localización de la energía también proporciona a la población seguridad para el suministro y distribución de energía, algo especialmente relevante a la hora de producir energía renovable a lo largo de todo el año. Xianguo Li (2005), concluye con la afirmación de que la diversificación y localización de los sistemas energéticos son los mejores sistemas energéticos del futuro, los cuales serían compatibles con el medio ambiente y permitirían el desarrollo sostenible y la seguridad energética tanto para el suministro como para la distribución a los consumidores de energía.

En este sentido, según múltiples fuentes, existen alternativas de producción de energía renovable como la biomasa o el biogás, aprovechando los desperdicios de agricultura, ganadería, pesca, silvicultura, jardinería, la cadena de producción y consumo de alimentos, y la fracción biodegradable de los residuos municipales en general, con un enorme potencial por explotar (siendo esto una realidad en otros países de la Unión Europea), y que podrían contribuir a la diversificación de los sistemas autobalanceados de producción energética renovable.

Por todo cuanto antecede es por lo que el abajo firmante, en nombre y representación de la asociación PLATAFORMA PARA LA DEFENSA DE LA CORDILLERA CANTÁBRICA, ante esa Delegación del Gobierno en Cantabria

SOLICITA:

Que se tenga por presentado este escrito y, en su virtud, se tengan por debidamente interpuestas las ALEGACIONES aquí expresadas en relación a la autorización administrativa previa y declaración de impacto ambiental del proyecto **PARQUE EÓLICO BUSTATUR** de 51 MW y su infraestructura de evacuación, en los términos municipales de Las Rozas de Valdearroyo, en Cantabria, y Alfoz de Santa Gadea y Valle de Valdebezana, en Burgos, promovido por la empresa Green Capital Power y con expediente IGE 6-2020.

Que en atención a cuantas razones se exponen y en especial a las severas afecciones que su ejecución tendría sobre el medio, a la infracción de figuras de protección de ámbito europeo, estatal y autonómico que confluyen en el espacio físico donde se prevé realizar la actuación, y a las demás alegaciones realizadas, que conducen a que la autorización del parque Bustatur incurriría en nulidad de pleno derecho, se proceda a emitir una **DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL DESFAVORABLE y al archivado definitivo del expediente.**

Firmado el 16 de julio de 2021

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Presidente de la asociación

PLATAFORMA PARA LA DEFENSA DE LA CORDILLERA CANTÁBRICA